

Lo que nos cuesta la sequía

LAS lluvias del otoño, las que ya han caído y las que esperamos que sigan cayendo, puede que nos hayan hecho olvidar la escasez de lluvias que hemos padecido desde el pasado invierno. Unos años de generosas lluvias parece que han borrado de nuestra memoria que la sucesión de ciclos secos es algo intrínseco a nuestro clima. Cabe preguntarse si la tranquilidad de estos años de bonanza, lejos de la conflictividad social que levantan los episodios de sequía, nos ha servido para prepararnos y articular las políticas, técnicas de gestión y medios más correctos para el uso y aprovechamiento de este escaso recurso natural que llamamos agua.

Cronología del año hidrológico 1998-1999, lo que nos cuesta la sequía

LAS primeras alarmas saltaron a principios de 1999. El otoño del 98 y el invierno 98-99 habían sido especialmente secos y el volumen de agua embalsada no sólo era apreciablemente menor que el de años anteriores, sino que mostraba una evolución decreciente marcadamente preocupante ya que éstos son los meses en los que las reservas de agua deben aumentar.

No obstante, aún había que esperar a las lluvias de la primavera. De hecho el volumen de agua embalsada en la península superaba la media de los últimos cinco años. Allí por el mes de febrero, el Canal de Isabel II ponía en marcha el protocolo de sequía y la Generalitat de Cataluña preparaba un decreto de medidas especiales. Como suele pasar, la gran alarma social se levanta en torno al abastecimiento de los grandes núcleos urbanos. No obstante, los grandes perdedores serían, como siempre, otros.

A mediados de abril, las pérdidas en el sector agrario se cifraban en unos 140.000 millones de pesetas. Los últimos datos que se han manejado en los medios de comunicación hablan de unas pérdidas en el sector ganadero (fundamentalmente en la ganadería extensiva) de unos 150.000 millones de pesetas y de unos 350.000 millones de pesetas en el sector agrícola (fundamentalmente en cultivos de secano, en particular, pérdidas en la remolacha, herbáceos y pérdidas por caída de la producción en el olivar, con el mal resultado que tienen las caídas de producción por la sequía en los repartos de cuotas europeas). En total, cerca del medio billón de pesetas, que no sólo son una enorme pérdida para la actividad del sector hoy, sino que es necesario repararlas para no comprometer su futuro.

Hay otras pérdidas que pueden contabilizarse, como puede ser lo que nos ha costado sustituir la caída en la generación de electricidad por centrales hidráulicas en un año de altos precios del petróleo. Sobre esto no disponemos de datos. Parece que el sector del turismo no se ha visto afectado, pero el esfuerzo realizado por mantener la oferta de agua durante los meses de verano nos pasa ahora la factura incluso con dificultades en el abastecimiento a núcleos de población. Además, existen unas pérdidas

difícilmente contabilizables en dinero, pero no por ello menos importantes. El aumento en la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos, con los efectos muy negativos que se producen en la propia calidad y existencia misma de estos acuíferos, los efectos ambientales que la pérdida de los caudales ecológicos de los ríos conlleva y la bajada en el volumen de agua embalsada en los humedales, son efectos de la sequía que tarde o temprano todos acabamos pagando.

Lo que se ha hecho por mejorar la gestión del agua

HEMOS vivido, en esta última década y en amplios sectores de la sociedad, un cambio de mentalidad importante que apoyamos y queremos subrayar como ya hemos hecho en otras ocasiones. Éste es el cambio de una política de grandes infraestructuras hidráulicas orientadas a la satisfacción de una demanda sobreestimada y realizadas a cualquier precio, a una política más racional económicamente hablando, centrada en el ahorro y la eficiencia, en la que los aspectos medioambientales y sociales toman un papel más importante frente a la imposición del hormigón. Este camino es el que deben seguir las actuaciones futuras frente a la tentación, agudizada en tiempos de sequía y elecciones, del populismo de las grandes presas y trasvases.

En lo que a gestión del agua se refiere, el paso más importante de los últimos años ha sido la elaboración y aprobación final de los Planes Hidrológicos de Cuenca (1998). Hoy día, conocemos mejor los usos que damos al agua, los problemas de sobreexplotación que sufrimos y tenemos una estimación de las demandas futuras y una lista de prioridades para la satisfacción de dichas

demandas. En este horizonte ya sólo nos queda que el gobierno se decida a formular el Plan Hidrológico Nacional, para que las actuaciones en asuntos del agua sigan un plan coherente y se abandone la reiterada y lamentable práctica de años pasados de ejecución de obras hidráulicas por decreto-ley. El último movimiento ha sido la reforma de la Ley de Aguas de 1985, que fue aprobada por la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados el pasado 22 de septiembre. Tiempo habrá de analizar la nueva normativa, pero cabe celebrar la mejor contabilidad sobre el uso del agua que se anuncia, así como un cierto escepticismo frente al comercio del agua y los efectos que sobre la economía del sector agrícola y el medioambiente puede esto tener.

Lo que se ha hecho por paliar los efectos económicos de la sequía

NO se puede decir que ni el gobierno ni el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación hayan permanecido inactivos en este último episodio de sequía. Ya en el mes de mayo, dicho ministerio dictó una orden por la que se establecían ayudas para el transporte de forraje deshidratado por un total de 225 millones de pesetas para aquellos ganaderos que hubieran visto dificultadas sus posibilidades de alimentar el ganado debido a la sequía. En el mes de junio se publica un Real Decreto que contenía ayudas a la agricultura y ganadería para paliar los efectos económicos de la sequía con el objetivo de mantener la actividad en el sector. Se contemplan las siguientes medidas y presupuestos:

a) *Indemnizaciones a las pérdidas en el sector agrícola no cubiertas por el seguro agrario (por no cumplirse las condiciones necesarias como en el caso del seguro integral del cereal de invierno, o por no estar cubierto el caso de*

la sequía en los seguros como pasa en otras plantaciones):
3.150 millones de pesetas.

b) Ganadería: préstamos para afrontar los costes extra de alimentación: 27.000 millones de pesetas.

c) Obras para el transporte y distribución de agua.

d) Otras medidas: aplazamiento del pago de las cuotas de la seguridad social y modificaciones en el rendimiento neto de la actividad agraria a efectos de tributación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicará posteriormente varias órdenes con criterios para la aplicación del Real Decreto anterior y a principios de septiembre crea la Oficina Permanente para Situaciones de Sequía. El último paso ha sido la decisión de bonificar los intereses de préstamos destinados a adelantar el pago de las ayudas comunitarias, con un límite máximo para los préstamos de 125.000 millones de pesetas.

Lo que se puede hacer para la próxima sequía

EVIDENTEMENTE que hay voces de descontento, ya que no es posible que estas ayudas cubran todas las pérdidas y a todos los afectados, pero más interesante que entrar en el detalle de las cifras nos parece el resaltar algunos aspectos que deberían considerarse.

Frente a medidas de excepción y transitorias que parece razonable que sean tomadas en episodios de sequía (medidas fiscales y créditos blandos, por ejemplo), hay otras que resulta difícil entender cómo no están ya previstas en un país como el nuestro que sufre sequías cíclicas. Éste es el caso de los seguros agrarios y la sequía.

La falta de cobertura o las muy restrictivas condiciones impuestas (como se ha visto en el seguro integral de cereales de invierno) obligan al estado a tapar estos agujeros mediante indemnizaciones y créditos blandos. Lo mismo se puede decir para la ganadería extensiva donde no existen sistemas de aseguramiento específico contra la sequía. Sólo estos dos capítulos suman más de 30.000 millones de pesetas puestos por el gobierno para paliar los efectos de la sequía.

DADAS las dificultades que ha sufrido el secano durante esta última sequía (no así el regadío), es fácil entender la petición de algunas asociaciones de agricultores para el aumento de la superficie de tierras de regadío. Esta posición parece chocar con la del Ministerio de Medio Ambiente expresada en el Libro Blanco del Agua donde se ven con bastante escepticismo las posibilidades de aumento notable de la superficie de regadío. En cualquier caso, el Plan Nacional de Regadíos está en proceso de elaboración; ya veremos si ambos ministerios son capaces de coordinarse como todos desearíamos.

No sabemos aún qué se está haciendo para declarar las pérdidas de producción ante la Unión Europea (especialmente en el caso del olivo) y que así se evite la perpetuación de los efectos de la sequía por culpa de cuotas de producción excesivamente bajas. Considerando que más de un 30 por 100 de la renta agraria procede de subvenciones de la Unión Europea, este tema resulta de la mayor importancia.

Lo que sí resulta urgente, en cualquier caso, es la modernización de los regadíos ya existentes, para evitar las altas pérdidas de agua que soportan (y de paso solucionar los problemas de pérdidas de suelo, salinización, y exceso de sustancias químicas empleadas).

Las subvenciones y/o ayudas fiscales en este aspecto sí que serían una inversión de futuro.

Hay aún un gran campo por delante para trabajar en lo que se refiere a depuración y reutilización de aguas, desalinización de agua de mar, técnicas de cultivo y riego con bajo consumo de agua, utilización de especies o variedades de menor exigencia de agua, etc. La inversión en investigación en estos campos sí que es una apuesta de futuro, aunque no haya foto frente a la presa, o aplauso de organizaciones agrarias.

MÁS aún, y desde una perspectiva global, estamos obligados a una gestión correcta de un recurso que compartimos con el resto del mundo. La ONU y el Banco Mundial, en repetidas ocasiones, han subrayado que la escasez de agua será el gran problema y la mayor fuente de conflictos en el siglo que viene. No nos parece ético desperdiciar este recurso natural tan escaso y valioso, y es, además, una grave irresponsabilidad contaminarlo o contribuir a un uso insostenible.